

Hacia la apropiación y destrucción de un recurso público:

El caso de la pesca de cerco/engrase de atún en el Mediterráneo

Sergi Tudela Casanovas*



Foto cedida por IFREMER

INTRODUCCIÓN

Dejando aparte los contenciosos pesqueros internacionales, los asuntos relacionados con la gestión de los recursos pesqueros (que en realidad es la gestión de los ecosistemas marinos) suelen recabar una atención más que discreta por parte de los medios de comunicación de masas y, en consecuencia, acostumburan a estar ausentes de los foros de debate sobre justicia ambiental. La tradicional opacidad del sector pesquero, unida a la complejidad de las situaciones —a menudo sólo aprehensibles con el concurso simultáneo de la biología, la economía y la antropología— hacen de la gestión de los recursos vivos marinos un tema difícil para el no experto. Lo cual es una lástima, porque el mundo de la pesca encierra un compendio tremendamente seductor de las dificultades y conflictos que genera la

gestión racional (tanto en lo social como en lo ambiental) de unos recursos naturales públicos autorreproducibles, y su estudio crítico se yergue en paradigma de algo tan etéreo pero ansiado como la búsqueda de la sostenibilidad.

Si existe un caso actual que conjugue todos estos elementos y sea, por tanto, merecedor de un estudio detallado, éste es, sin duda, el de la pesquería de atún en el Mediterráneo, abordado a la luz del reciente fenómeno del «engrase de atún» (mal denominado por algunos como acuicultura de atún). Así pues, empecemos por... el final.

EL SISTEMA DE CERCO Y ENGRASE

En la actualidad, la mayor parte del atún rojo (*Thunnus thynnus*) capturado en el Mediterráneo por los países ribereños es pescado mediante la técnica del cerco de atunes, un sistema consistente en una gran red rectangular con la que se envuelve completamente el banco de pescado. Estas flotas industriales, sobre todo francesas y, en menor medida, italianas, españolas, tunecinas, croatas y turcas se cuentan entre las más tecnificadas

*Sergi Tudela es doctor en ciencias biológicas y trabaja como Coordinador de Proyectos de Pesca en la Oficina del Programa Mediterráneo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Se le puede contactar en la dirección: studela@atwwf.org.

del Mediterráneo, donde constituyen la excepción en un mar dominado por flotas de pequeña y mediana escala. Sofisticados sistemas de detección acústica de los bancos se dan la mano con sistemas de localización aérea a través de avionetas y helicópteros de apoyo, con lo que la denominada *capacidad de pesca* de estas flotas alcanza enormes —e inéditas— cotas. El atún así capturado —vivo— es transferido a grandes jaulas de transporte, las cuales son remolcadas desde el lugar de la captura a baja velocidad (1 nudo) hasta el lugar de destino, a menudo a cientos de kilómetros de distancia, donde son nuevamente transferidos a jaulas fijas de engorde. Allí, los animales son cebados con pescado (fresco o congelado) durante unos meses, con la finalidad de que su carne alcance los estándares óptimos en contenido graso que dicta el mercado japonés de *sushi*. El producto final, como puede suponerse, alcanza altos precios en Japón, siendo el *sushi* de atún rojo del Mediterráneo el más cotizado. La producción en las granjas de engorde situadas en España, Malta y Croacia (países que concentran la práctica totalidad de este tipo de instalaciones) ascendió el año 2001 a más de 11.000 toneladas. Sólo la región de Murcia, en España, exportó a Japón más de 7.000 toneladas, por valor de 150 millones de euros. Con estas cifras, no es de extrañar que las autoridades españolas incluyan una visita a las granjas en la agenda de cuántas personalidades de importancia recalán en Murcia, como escaparate del ingenio empresarial autóctono. Especialmente si tenemos en cuenta que ni una sola tonelada de atún engordado se *produjo* en el conjunto del Mediterráneo con anterioridad a 1996, cuando esta actividad dio comienzo en Croacia.

¿UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE?

Ahora bien, ¿es esta próspera actividad un ejemplo de sostenibilidad? Aún más, ¿estamos ante una demostración palpable del conocido tópico según el cual la acuicultura tomará el relevo de la pesca, una actividad supuestamente en decadencia que depende de unos mares ya exhaustos? Y, finalmente, ¿cuál es el provecho social generado por esta actividad? La respuesta a estas y otras preguntas pone de relieve las enormes disfunciones existentes en los mecanismos de gestión de nuestros recursos

marinos y, de paso, ilustra cómo el imparable proceso de apropiación de los bienes públicos por poderosos intereses privados se hace también extensivo a los recursos marinos. Y todo ello, casi sin hacer ruido ...

En primer lugar, dado que estamos hablando de una actividad fundamentada en las capturas sobre una población salvaje (algo que mucha gente olvida una vez el pescado está siendo estabulado en las granjas), parece lógico interrogarse acerca del estado de conservación de esta población natural. Y la respuesta no es, en absoluto, halagüeña. La mayor población mundial (o stock, en términos de la ciencia pesquera) de atún rojo (*Thunnus thynnus*) habita el Mediterráneo y aguas atlánticas adyacentes. Si bien el atún ha sido objeto de explotación tradicional por parte de los países ribereños, utilizando una notable diversidad de artes y técnicas pesqueras, la elevada demanda por parte de los mercados orientales —sobre todo Japón— condujo al desarrollo de verdaderas pesquerías industriales o de gran escala por parte de flotas palangreras y de cerco. La ausencia de zonas económicas exclusivas en el Mediterráneo determina que las aguas internacionales se hallen a tan sólo 12 millas de la costa, hecho que ha favorecido la proliferación de flotas industriales piratas o de pabellón de conveniencia explotando impunemente el stock de atún en alta mar. Este hecho, unido al gran incentivo económico asociado a esta pesquería, ha venido determinando que las recomendaciones de gestión —vinculantes— emanadas de la Comisión Internacional para la Conservación de los Atunes Atlánticos (ICCAT, en sus siglas en inglés) haya derivado en papel mojado, y que las cuotas de captura anual sean ampliamente superadas (como reconoce el propio ICCAT). Así las cosas, la última evaluación científica del stock se realizó en 1998 y reveló que la fracción reproductora de la población se había reducido alarmantemente, siendo tan sólo un 20 % de la estimada en 1970, apenas 30 años atrás. Los científicos, además, manifestaban su preocupación por el incremento de la mortalidad por pesca tanto sobre la fracción adulta como sobre la juvenil, y recomendaron una sensible reducción de las capturas —por debajo de las 25.000 toneladas— para evitar el colapso de la población, que aparecía como muy posible (90 % de probabilidades) en los próximos 5-10 años. Por supuesto, la reducción de mortalidad necesaria para llevar a cabo un auténtico plan de recuperación de la pobla-

ción —sin duda altamente necesario—, sería mucho mayor. Cuatro años después, la cuota total vigente es de 29.500 toneladas y la presión sobre el stock ha subido alarmantemente. El fenómeno del engorde en jaulas o *tuna farming* tiene mucho que ver con ello.

IMPACTOS AMBIENTALES DE UNA DEMANDA LEJANA

Como ya se ha dicho, el atún de granja contiene un nivel óptimo de grasa, lo que permite obtener de ese producto un *sushi* de gran calidad. Ello ha ampliado enormemente la demanda del mercado japonés, puesto que estamos ante un producto nuevo. El *sushi* de atún rojo disponible hasta el momento era o bien de una calidad extrema (individuos prereproductores), alcanzando precios desorbitados que lo ponían al alcance de sólo una selecta minoría, o bien de calidad (y precio) más bien baja (procedente de individuos postreproductores y juveniles). El *sushi* de atún rojo del Mediterráneo engrasado en granjas aún una buena calidad con un precio intermedio, de modo que la presión del mercado japonés por el atún del Mediterráneo se ha disparado, por ser ahora un producto demandado por las clases medias. Si bien esta referencia a los mercados puede parecer un tanto etérea por lo que respecta a sus efectos en el día a día, el incremento de la presión sobre el stock salvaje es patente. Quizás el mejor ejemplo de ello lo proporciona el caso de Argelia, último Estado en constituirse en miembro del ICCAT (febrero de 2001) y que carece de cuota alguna de pesca para el atún rojo. El reparto de la cuota total entre los diversos estados realizada en el seno de ICCAT se fundamenta en el nivel de capturas históricas. Una entidad financiera privada, el Union Bank, a través de su filial Union Pêche ha anunciado a bombo y platillo la construcción de una nueva flota de cerco de atún, inédita en aquel país, con el propósito declarado de que el país se aproveche del nuevo negocio del engorde de atún. Dado el estado del stock y la violación flagrante que supondría el inicio de esta nueva pesquería con respecto a las reglas del juego de ICCAT, este anuncio parecería una broma pesada, si no fuera porque los 21 barcos industriales (20 de 30 m de eslora y 1 de 40 m) están ya siendo construidos en asti-

lleros españoles y portugueses. Una vez más, es evidente que las perspectivas de grandes ganancias a corto plazo no se someten a criterios de sostenibilidad en el uso de los recursos (aun cuando esté en peligro la propia fuente de riqueza, en este caso la integridad del stock de atún).

Por otro lado, la práctica del engorde de atún está ocasionando un problema adicional, aunque más sutil, para la supervivencia del recurso, por cuanto agudiza aún más el eterno problema de la obtención de datos fiables de la pesquería. Es oportuno recordar que la gestión racional de un recurso pesquero debe apoyarse en datos científicos acerca del estado de conservación del stock en cuestión. Precisamente, la evaluación del stock de atún del Mediterráneo programada por el ICCAT para el año 2000 debió posponerse *sine die* debido a la insuficiencia de datos. El engorde viene a complicar más la situación por lo que implica de transbordos en alta mar (en lugar de las tradicionales descargas en lonja), los cuales a menudo involucran operaciones comerciales entre países diferentes (la mayor parte del atún estabulado en España es capturado por flotas francesas o, incluso, tunecinas). El proceso de engorde también complica el muestreo biológico, necesario para conocer la estructura de edades de la población. En general, hoy es mucho más difícil conocer con un mínimo de fiabilidad la cantidad y lugar de origen de las capturas, así como su composición biológica y la nacionalidad de las flotas implicadas. ICCAT ha advertido recientemente que estas incertidumbres menoscabarán gravemente la fiabilidad de las futuras evaluaciones del stock.

No sólo las poblaciones de atún se ven afectadas por las actividades de engorde, sino también las de otras especies de pequeños y medianos pelágicos (sardina, anchoa, alacha, etc.). Estas especies son utilizadas en grandes cantidades como alimento del atún. Si bien una parte de este pescado es importado congelado procedente de otros mares, otra procede de pesquerías mediterráneas. Así, en España y Croacia las granjas contratan flotas locales para que les suministren pescado local como alacha o anchoa con que alimentar el atún. Una vez más, el hecho que estas capturas destinadas a las granjas a menudo no pasen por lonja (como es preceptivo, al menos en España) lleva a capturas no declaradas y problemas en la gestión de estas especies. Así, por ejemplo, se ha referido un consumo de más de 4.500 toneladas de anchoa al año en el caso

de una granja croata. Estas capturas procedían del propio Adriático, una región donde el stock local de anchoa se encuentra sometido a una elevada presión, hallándose en proceso de recuperación tras haber experimentado un colapso. La gestión de las poblaciones de pequeños pelágicos es especialmente difícil en el Mediterráneo, donde se han producidos diversos colapsos poblacionales. Estas especies (sardina, anchoa, alacha) juegan un papel central en el funcionamiento de los ecosistemas marinos debido a que sus poblaciones controlan tanto las poblaciones de sus predadores como de sus presas. El incremento de la presión sobre las poblaciones de atún y de pequeños pelágicos puede redundar en un incremento de la huella ecológica sobre los ecosistemas marinos mediterráneos, un nivel de impacto humano que ya roza el nivel límite más allá del cual se verifica la degradación estructural y funcional de los ecosistemas. En efecto, estudios recientes referidos al Mediterráneo noroccidental indican que la pesca se «apropia» del 40% del total de la producción primaria del ecosistema, una huella ecológica que se cuenta entre las más elevadas jamás estimadas. Problema aparte es el perjuicio social provocado por la competencia con el uso tradicional de los pequeños pelágicos; en Croacia la creciente demanda por parte de las granjas de atún perjudica gravemente la disponibilidad de sardina y anchoa para la industria procesadora local.

La estabulación del atún es también un factor de conflictividad con respecto al uso de la franja litoral, ya muy humanizada en el Mediterráneo. Ello incluye las necesidades de conservación de espacios naturales valiosos; en Murcia, existen granjas localizadas dentro de zonas de alta sensibilidad ecológica, incluso catalogadas como LIC (Lugar de Interés Comunitario) en el marco de la Directiva Europea de Hábitats. La saturación de granjas en esta región se ha traducido en ampliaciones ilegales de las instalaciones. Es importante destacar que la tecnología empleada únicamente permite la instalación de las granjas a escasa distancia de la costa, entrando de este modo en conflicto (directa o indirectamente a través de todas las actividades de gran escala asociadas) con actividades costeras como la navegación, la pesca artesanal y el turismo. Desde Murcia hasta Malta, pasando por las Baleares, los pescadores tradicionales vienen lamentando los perjuicios que les ocasionan las actividades de pesca/engorde de atún.

Como ya hemos apuntado, el énfasis en el engrasamiento de la carne, por encima del incremento en biomasa, implica que a menudo los atunes estabulados sean adultos con unas tasas de crecimiento más bien bajas o moderadas. Esto es especialmente cierto en las explotaciones españolas, pues las explotaciones croatas involucran atunes de pequeño tamaño, muchos de ellos por debajo de la talla mínima legal (6,4 kg), hecho que constituye otro problema. Este énfasis en el engrasamiento determina un alto nivel de producción de desechos, pues la denominada tasa de conversión del alimento es muy baja (una razón de 20:1 en explotaciones murcianas). Esta gran potencialidad contaminante se cierne en amenaza palpable sobre los ecosistemas adyacentes, que a menudo incluyen hábitats tan valiosos como las praderas de fanerógamas marinas. Estudios recientes han confirmado este efecto pernicioso de las granjas en España y Croacia, aunque ya era conocido en Australia, donde se inició la actividad. Además del impacto biológico provocado por un exceso de materia orgánica —susceptible de derivar en episodios de eutrofización—, el peligro de contaminación de las aguas de baño en zonas turísticas es evidente. Por otro lado, existen referencias al problema inverso, esto es, a la hipotética presencia de niveles inusualmente elevados de contaminación por tóxicos en la carne del atún procedente de granjas mediterráneas. Este efecto, denominado bioacumulación, consiste en la magnificación del contenido de sustancias tóxicas en los tejidos a lo largo de la red trófica, de modo que en las especies de predadores apicales, como el atún, éstas suelen alcanzar las máximas cotas. El porqué del mayor contenido en tóxicos en el atún de granja con respecto al atún salvaje, denunciado al parecer por asociaciones de consumidores japonesas y sostenido por fuentes oficiales niponas, sería, no obstante, una incógnita.

HACIA LA APROPIACIÓN DE UN RECURSO PÚBLICO

Una vez visto el panorama global, especialmente cuanto concierne a la sostenibilidad de la explotación del stock de atún y a los posibles efectos sobre los ecosistemas y sobre el uso humano de la franja litoral, parece pertinente sumergirnos algo más

en los aspectos socioeconómicos de esta nueva «industria». Para ello, nada mejor que abordar dos cuestiones fundamentales: de quién es el recurso y quién se beneficia de él. La respuesta a la primera pregunta es clara: el recurso es un bien común cuya explotación, por consiguiente, debiera beneficiar a la sociedad en general. No obstante, las especies marinas no conocen las fronteras y menos aún las especies de grandes pelágicos, como el atún rojo, que llevan a cabo vastas migraciones. Como ya se ha dicho, la inexistencia de zonas económicas exclusivas en el Mediterráneo (las famosas ZEE's de 200 millas) conllevan que el stock mediterráneo de atún se capture sobre todo en aguas internacionales, aguas en las que se verifica la reproducción de la especie. Si bien es cierto que este hecho complica la situación, ello no significa que los estados ribereños no hayan asumido una responsabilidad política en la protección y gestión racional del stock. Así lo demuestra la propia existencia de la Comisión Internacional para la Conservación de los Atunes Atlánticos (ICCAT), cuyas recomendaciones de gestión son vinculantes para las partes contratantes (incluida la Unión Europea, que las integra automáticamente en el acervo legislativo comunitario. Por otro lado, la propia Convención de Naciones Unidas sobre la Protección y Gestión de los Stocks Transzonales y Altamente Migratorios establece claramente la responsabilidad de los países pesqueros en la conservación de los recursos, aunque éstos se hallen en aguas internacionales. Esta responsabilidad de los países ribereños (incluida la UE) en la gestión de la pesquería de atún se traduce también en un esfuerzo económico en investigación científica (encaminada a mejorar la gestión del stock), así como también en infraestructuras públicas, subvenciones al sector —como ayudas a la construcción de embarcaciones—, actividades de inspección y vigilancia, etc. Todo ello, claro está, a cargo de fondos públicos.

En el campo contrario, en paralelo a esta intervención pública en la gestión (aún claramente insuficiente, por cierto) estamos asistiendo en los últimos años a una vertiginosa privatización de facto del uso del recurso y, por ende, de los beneficios obtenidos. Esta concentración de los beneficios ha llegado a cotas máximas de la mano de las nuevas técnicas de engorde asociadas a la captura del atún mediante grandes cerqueros. La necesidad de atún vivo para las granjas comporta

que sólo las capturas de cerco sean compatibles con esta actividad, lo que está llevando a que este tipo de arte monopolice la pesquería. Y ello va en detrimento de otras flotas tradicionales de menor escala, como algunos palangreros y sistemas de pesca a la línea, que no pueden soñar en competir por el recurso con unas flotas industriales hipertecnificadas y con gran capacidad de captura, capaces de rastrear con métodos acústicos y aéreos grandes extensiones de mar y que llegan a servirse hasta de información satelitaria en tiempo real sobre los niveles de producción primaria oceánica. Los verdaderos señores del atún, no obstante, son los empresarios propietarios de las granjas, un nuevo poder económico de origen casi siempre autóctono —verdaderos *self-made men*— que ha irrumpido fuertemente en la escena económica y social del Mediterráneo. Significativamente, es un secreto a voces que algunas de estas fortunas tienen su origen en el tráfico del atún capturado ilegalmente por las famosas flotas de bandera de conveniencia que faenan impunemente en el Mediterráneo ...

De hecho, todo comenzó en Croacia, tras su independencia de Yugoslavia, donde antiguos emigrantes a Australia se plantearon, con éxito, transplantar la técnica que habían aprendido allí, donde el atún rojo del sur era engordado con destino al mercado japonés. Casi inmediatamente aparecieron las primeras explotaciones en Murcia (España). En la actualidad, además de España, Croacia y Malta, existen perspectivas inminentes de nuevas granjas en Marruecos, Turquía e Italia, así como planes más o menos avanzados en Túnez, Francia y Argelia. La mayor compañía croata productora de atún engordado, Kali Tuna, es una empresa mixta con participación de capital croata, australiano y japonés. En cuanto a España, las principales empresas están vinculadas a las familias Fuentes, Albaladejo y Ginés Méndez. Fuentes cuenta con sociedades conjuntas con poderosas empresas japonesas como las multinacionales Mitsui & Co. Ltd., Mitsubishi Corporation o la empresa de distribución y procesado Kanetomo Co. Ltd.

Si el peligro de colapso a corto plazo de la población silvestre de atún es evidente, no es menos preocupante el impacto que el desarrollo salvaje del binomio pesca industrial de cerco/granjas de engorde supone para la socioeconomía de las comunidades pesqueras del Mediterráneo. Frente a la crisis crónica de la pesca tradicional, las autoridades locales y nacionales su-

cumben ante el aparente atractivo de una nueva actividad que promete pingües beneficios y se apoya en «las nuevas tecnologías», lo que le da un aire de modernidad del que carece el sector tradicional. Esta percepción es atizada por una vasta coalición de intereses entre la industria y un amplio grupo internacional de científicos que «venden» sin complejos la imposible idea del atún como «la ternera del futuro», con vistas a legitimar la validez de las actuales prácticas de engorde en tanto que un primer paso hacia la domesticación del atún y, de paso, reclamar de la Unión Europea una financiación generosa para sus investigaciones, aludiendo al pretendido enorme interés social de la investigación. No en vano, ésta contribuirá nada menos que «a aliviar el hambre en el mundo», en boca de uno de los promotores del proyecto en declaraciones a un diario francés de gran tirada. Nada se dice de las enormes dificultades técnicas que atraviesa la investigación (relacionadas tanto con el proceso de reproducción —verificándose una mortalidad masiva de las larvas— como los escasos avances existentes en la fabricación de piensos alternativos al pescado fresco o congelado), ni de la escasa sostenibilidad ecológica (en términos de aprovechamiento de la energía del ecosistema) intrínseca a la hipotética producción a gran escala de una especie de gran predador. Ni, lo que es más importante, sobre el verdadero problema que tenemos sobre la mesa: ¿qué ocurrirá con el atún del Mediterráneo *mientras tanto*? Los propios científicos embarcados en la salvífica tarea de domesticar el atún reconocen que no lo conseguirán antes de 10 o 20 años ...

Volviendo a los efectos sociales del engorde de atún, el más evidente de ellos es el peligro de desestructuración del sector, proceso que ya se observa en España. Y es que, ¿puede resistirse un sector tradicional en crisis al empuje arrollador de una actividad agroindustrial de gran escala, arropada por las administraciones y bendecida, desde el desconocimiento, por la opinión pública? Difícilmente. Una fuga de capital humano —con visos de ser irreversible— se está ya produciendo donde pescadores tradicionales venden sus barcas para convertirse en asalariados en las granjas. De una forma o de otra, directa o indirectamente (trabajando bajo contrato para suplir con pescado barato a las granjas), el sector tradicional deviene cautivo de la gran industria de la pesca/engorde del atún. Por no hablar de la pérdida de influencia frente a la administración de las

asociaciones de pescadores en detrimento de la industria del engorde de atún, cuya gran concentración de poder económico la convierte en el interlocutor privilegiado de los gestores públicos.

El modelo, pues, es claro. Apropiación del recurso público (el atún) y del uso del dominio público marítimo por unos pocos empresarios sin escrúpulos con gran capacidad de *lobby* sobre las administraciones públicas, los cuales llevan a cabo una explotación hasta el límite de la población de atún siguiendo el paradigma de la maximización de los beneficios inmediatos. En este contexto, resulta incluso *naïf* cuestionarse sobre la sostenibilidad de la pesquería por cuanto nos hallamos inmersos en una auténtica carrera por el último pez que conlleva una más que probable extinción comercial de la pesquería a corto/medio plazo (menoscabando así el principio de la equidad intergeneracional). De hecho, la industria admite en privado que el enorme tamaño de algunas de las nuevas embarcaciones construidas para el Mediterráneo obedece al criterio de que sean operativas en caladeros lejanos, como el Índico o el Pacífico, donde ya se prevé que podrían ser exportadas una vez la población de atún del Mediterráneo se agote. Todo esto ocurre ante la connivencia de las administraciones, que a sabiendas de la inexistencia de un marco regulador específico para esta nueva actividad prefieren manejarse en esta cómoda laguna legal que permite legitimarlo todo. No en vano, algunos empresarios murcianos ya han amenazado con instalarse en países del Maghreb si las reclamaciones de los conservacionistas en el sentido de desarrollar un marco regulador específico para el engorde de atún son tenidas en cuenta.

Mientras, las administraciones continúan vanagloriándose obscuramente de apoyar esta nueva prueba del ingenio de la iniciativa privada, capaz de convertir algo tan deprimido económicamente como la pesca mediterránea en una enorme fuente de divisas. Con bombo y platillo acaba de ser inaugurado en Cataluña el que se anuncia como «mayor pesquero de la flota mediterránea española». Este cerquero de atún dotado con los últimos adelantos tecnológicos en sistemas de detección fue botado en presencia de las máximas autoridades de pesca del gobierno de Cataluña, el cual reconoce impudicamente que cerca de la tercera parte de los 2,05 millones de euros que ha costado su construcción han sido subvencionados a fondo per-

dido por la Unión Europea, previo informe favorable de las administraciones españolas. La construcción de otras tres embarcaciones se nos anuncia como inmediata. Recapitemos: la construcción de un pesquero de gran escala, destinado a incrementar la presión pesquera sobre una población de una especie severamente sobreexplotada y que ya cuenta con una teórica cuota límite de captura, es subvencionada con el dinero de los contribuyentes. Parece un despropósito, aunque el motivo está claro: todos quieren una parte del pastel mientras el pastel no se acabe. La industria del engorde necesita proveedores —flotas de cerco— y el atún en España se ha capturado tradicionalmente con otros métodos (líneas de mano, curricán, almadraba, palangre). Si queremos competir con la flota francesa de cerco de atún, debemos promover el desarrollo de una flota española dotada de una gran capacidad de pesca. Las víctimas (además del atún rojo) serán el resto de flotas tradicionales, mucho menos tecnificadas y «eficientes» y, claro está, incapaces de erigirse en suministradoras de atún vivo para las granjas. Nos hallamos pues ante un caso claro de injusticia social en el uso (y aprovechamiento) de un recurso natural común.

UNA REFLEXIÓN URGENTE

En setiembre de 2001 la Delegación de Malta presentó una propuesta formal en la 26ª Sesión Plenaria del Consejo General de Pesca del Mediterráneo, en el sentido de instaurar una zona de pesca en aguas internacionales al sur de la isla donde la pesca de atún al cerco y el resto de actividades asociadas al engorde de atún (arrastre de las jaulas, etc.) estuvieran excluidas. Dicha iniciativa se justificaba por los perjuicios causados a la flota local de palangre, en razón de la competencia por el recurso y los destrozos causados en las artes de pesca. Si bien esta propuesta fue desestimada debido a la oposición frontal de la delegación de la Unión Europea (que velaba por los intereses de sus flotas atuneras), el caso ejemplifica las graves tensiones que se producen en toda la región mediterránea entre la actividad pesquera tradicional y la creciente industria de la captura/engorde de atún. Una fuerte oposición en el seno de las cofradías de pescadores locales se registra también en todo el litoral mediterráneo español frente

a los nuevos proyectos en curso de instalación de granjas de atún, algunos de los cuales están siendo prácticamente impuestos por las autoridades autonómicas pese a la abierta oposición de los pescadores locales.

En suma, los ingredientes de siempre: privatización del bien común (en este caso con la agravante de su probable destrucción a corto/medio plazo), concentración de los beneficios en pocas manos, ayudas públicas al pillaje del recurso natural, desposeimiento del recurso respecto de los usuarios tradicionales, desestructuración social y económica del sector tradicional, inexistencia de un marco regulador, connivencia de las administraciones, ineficacia de los organismos internacionales supraestatales, demanda creciente del producto por parte un poderoso mercado...

Ante esta situación, se viene gestando un amplio movimiento social en la región mediterránea que exige una reflexión urgente sobre el alcance del fenómeno, que conduzca al establecimiento de un marco regulador compatible con la sostenibilidad ecológica y social de esta actividad. Este frente —aún poco estructurado— abarca desde el propio sector pesquero tradicional hasta entidades ecologistas de ámbito local, científicos adscritos a organismos públicos de investigación y entidades conservacionistas internacionales. En este contexto, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) trabaja activamente en dar a conocer el problema y recabar soluciones, manteniendo un contacto estrecho con las partes afectadas. La organización conservacionista estima imprescindible una moratoria inmediata de carácter precautorio en el establecimiento de nuevas granjas en la región, como paso previo a la elaboración de un marco regulador válido para el conjunto del Mediterráneo. Recientemente, en mayo de 2002, el WWF ha conseguido el respaldo unánime a una propuesta presentada a debate en el Subcomité de Evaluación de Stocks del Comité Científico Asesor del Consejo General de Pesca del Mediterráneo, en el sentido de crear un grupo de trabajo con el mandato de elaborar un Código de Conducta que establezca las bases de este marco regulador panmediterráneo. Si bien ello supone un reconocimiento explícito del problema por parte las más altas instancias científicas de la región, mucho —casi todo— queda aún por hacer. Y mañana puede ser ya demasiado tarde.